

### **Bloquean bodegas rurales**

Colocada en la mesa por el diputado panista, José Erandi Bermúdez una iniciativa de Ley de Almacenamiento Rural que le abriría las puertas a particulares para crear centros de acopio para servicio de productores de granos, ésta, tras el sí de la Cámara Baja, se encuentra congelada en el Senado. Aparentemente la congeladora llegó a presión de multinacionales estadounidenses asentadas en el país. Estamos hablando de Archer Daniels Midland y Cargill.

La primera es la principal productora del planeta en derivados de maíz, con énfasis en alta fructosa. La segunda es la mayor carta en materia de producción y distribución de productos agropecuarios en general. Ambas trabajan en alianza con productores nacionales.

La propuesta, colocada desde marzo 2016, plantea la integración de un Sistema Nacional de Almacenamiento Agroalimentario bajo la rectoría de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los silos a construir estarían en manos de los productores del campo. Estamos hablando de algo así como revivir el escenario de los Almacenes Generales de Depósito que murieron en el sexenio salinista, sólo que ahora bajo la férula privada.

Aunque en teoría la que fuera paraestatal existe bajo la rectoría de la Secretaría de Economía, su acción es simbólica. La función de ésta apuntaba no solo a garantizar abasto, sino precio, dada la presencia de intermediarios voraces que en la coyuntura de las cosechas compraban los granos a precios de ganga bajo el clásico lo tomas o lo dejas pudrir.

De hecho, la exposición de motivos del ordenamiento hablaba de que con la posibilidad de almacenamiento de la producción de maíz, cuya tonelada se cotiza actualmente en 3 mil 300 pesos, podría en sólo dos meses subir 20%, 30% o 40%. El precio actual está fijo desde el 2014, cuando la paridad peso-dólar se ubicaba en 13 pesos, con la novedad de que los fertilizantes y agroquímicos se cotizan en billetes verdes. La ruta hablaba, además, de arraigar a los productores rurales en pequeña escala ante la tentación de migrar a Estados Unidos.

La paradoja del caso, de ahí el interés de las firmas del país del norte, es que 80% del consumo del país se importa de Estados Unidos y aunque en la teoría la propia Sagarpa ofrece un apoyo a los productores de maíz de entre 700 y 800 pesos por tonelada, aun así el desequilibrio es cuantioso.

Bajo el marco de la red de silos el gobierno podría mantener un inventario no solo de existencia, sino de calidades. Las pocas bodegas o silos existentes hasta el crepúsculo del último gobierno panista fueran afectadas por un proceso de supuestas prácticas monopólicas abierto por la Comisión Federal de Competencia,

que los obligó a cerrar. En esas fechas la tonelada de maíz se ubicaba en 5 mil 600 pesos.

En aquel entonces éstas se agrupaban en la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, en cuyo marco participaban empresas como las propias Cargill y Archer Daniels Midland; Comaíz, con sede en Querétaro; Grupo Granos, de Sinaloa; Tyson, Minsa, Maseca y Semillas Don Cristóbal, de Jalisco. De descongelarse la iniciativa, los productores rurales se constituirían en sociedades de producción rural para solicitar su registro al Sistema Nacional de Almacenamiento. ¿Victoria de los acaparadores?

**Más Odebrecht.** Además de los tres videos en escena donde ex funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht ofrecen pelos y señales del otorgamiento de sobornos para recibir contratos en México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le pone un ingrediente más al coctel. De acuerdo con sus investigaciones, las transferencias ilícitas hacia diversos países se operaron un tiempo desde México vía un personaje llamado Olivio Rodríguez. Este habría enviado originalmente 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto.

Más tarde, en noviembre de ese año, se transfirieron otros 951 mil dólares a una empresa también ligada a Lozoya. Meses antes, en coincidencia con campañas políticas, Rodríguez, habría enviado otros seis millones de dólares a una empresa fantasma creada en Veracruz. Olivio Rodríguez utilizaba como puente las empresas offshore Zecapan y Latin America Asia Capital Holding. Las órdenes de depósito se enviaban a bancos de Suiza y Liechtenstein. Su código de indentificación era “Gigolino”

**COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ.** Diciembre 14 del 2017

### ***La desmemoria, oportunidad dorada para el populismo***

El populismo no es nuevo en México, simplemente que durante al menos tres décadas nos dedicamos a pagar las consecuencias de este tipo de políticas, y algunos de sus residuos todavía pesan en los presupuestos actuales. Al paso del tiempo parece que hemos olvidado, o simplemente no conocemos, las funestas consecuencias de avalar las irresponsabilidades presupuestales.

No tener memoria histórica de las malas decisiones económicas es uno de los peores errores en un país. La última gran crisis, con todo y disparo inflacionario, ocurrió hace 22 años, y las crisis derivadas del peor populismo de Luis Echeverría y José López Portillo ocurrieron hace más de 30 años, antes de que naciera más de la mitad de la población de este país. Por eso es que hoy no provocan escalofríos las medidas con las que se presentan algunos precandidatos presidenciales.

Debe quedar claro que ocurrencias como una pensión universal como premio por ser mexicanos o un sueldo a manera de incentivo para quien ni estudia ni trabaja son aberraciones para las finanzas públicas. Simplemente porque ninguna de las dos propuestas es financiable sin un recorte de otros gastos, algunos muy importantes, o sin un aumento de impuestos. La manera como pretenden explicar sus promotores la manera de financiar esas ocurrencias pertenece más al terreno del pensamiento mágico que al de la economía.

Un político convencional toma la aberrante decisión de prometer y después no cumplir. Parece ser el caso del iluminado de costumbre y del que ahora se enciende como cerillo. Pero un populista contemporáneo tiende a cumplir con aquellas promesas de campaña más absurdas que le permitan alimentar su ego y, de paso, presentarse como confiables ante su clientela política.

Ahí está Donald Trump reconociendo, por ejemplo, a Jerusalén como la capital de Israel, con todo y lo riesgoso que eso es hasta para el propio pueblo judío. O su muro en la frontera con México, que seguro empieza a levantar el próximo año.

Un subsidio generalizado e indiscriminado, como el que proponen Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, no va acompañado de ninguna reflexión, algún ejercicio presupuestal. Es una promesa atractiva para atraer votantes. Y falta ver si desde la trinchera priista no pretenden replicar el anzuelo que usaron en el Estado de México del salario rosa a todas las mujeres, que resultó ser un auténtico salvavidas para una causa que se veía perdida.

Si los electores se enganchan en esta trampa, corren el riesgo de que cualquiera de los candidatos que gane incumpla las promesas. Si son opositores, le echarán la culpa a los que se fueron por no dejar los recursos necesarios para sus planes. Pero si en esa megalomanía se animan a decretar algo así, van a devastar las finanzas públicas.

Las campañas son momentos acalorados que se parecen más a un concurso de descalificaciones que a un intento de contrastar propuestas. Pero aun al calor de estos meses intensos de campañas, incluida esta fase disfrazada de precampañas, hay que aplicar siempre el filtro lógico del cómo hacerle para que puedan cumplir.

La falta de memoria histórica le ha dado una oportunidad dorada al populismo.  
[ecampos@economista.com.mx](mailto:ecampos@economista.com.mx)